

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

INE/JGE09/2024

**RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

Ciudad de México, 29 de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Inconformidad, identificado con el número de expediente **INE/RI/SPEN/58/2023**, promovido en contra de la Resolución del Procedimiento Laboral Sancionador **INE/DJ/HASL/PLS/26/2022**.

G L O S A R I O

- **Recurrente.** *****, ***** en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
- **Autoridad instructora.** Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
- **Autoridad resolutora.** Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
- **DEA.** Dirección Ejecutiva de Administración
- **DEOE.** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
- **DESPEN.** Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.
- **Estatuto.** Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
- **INE.** Instituto Nacional Electoral.
- **LFT.** Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

- **LGIPE.** Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- **Lineamientos.** Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad.
- **PLS.** Procedimiento Laboral Sancionador

A N T E C E D E N T E S

I. PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR INE/DJ/HASL/PLS/26/2022

1. **Denuncia.** El 7 de abril de 2022 se recibió en la Dirección Jurídica el oficio INE/DEOE/CA-0221/2022, a través del cual el Coordinador Administrativo en la DEOE remitió cuatro actas de hechos, de las que se advertían conductas probablemente infractoras atribuidas al recurrente.
2. **Auto de admisión y remisión a investigación.** El 20 de abril de 2022, la autoridad instructora ordenó dar vista al área de investigación, a efecto de que se realizaran las diligencias necesarias para determinar el inicio o no del procedimiento laboral sancionador.
3. **Inicio del procedimiento.** El 5 de septiembre de 2022, una vez concluidas las diligencias de investigación, la autoridad instructora determinó el inicio del procedimiento laboral sancionador, en contra del recurrente, por encontrar elementos, de manera indiciaria, sobre posibles conductas infractoras, a los artículos 71, fracciones XI y XIII y 72, fracciones VII y XIII del Estatuto consistentes en: omitir desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmeros apropiados, observando las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos; omitir asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos; ausentarse de su lugar de trabajo o abandonar sus actividades sin justificación o autorización de su superior jerárquico inmediato, y concurrir a su lugar de adscripción o al desempeño de sus actividades en estado de ebriedad.
4. **Notificación.** El 8 de septiembre de 2022, la autoridad instructora notificó al recurrente el inicio del PLS instaurado en su contra y lo emplazó al

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

procedimiento corriéndole traslado con la denuncia y las correspondientes pruebas de cargo.

5. **Contestación al emplazamiento.** El 23 de septiembre de 2022 el recurrente presentó ante la oficialía de partes común el escrito de contestación, a través del cual ofreció las pruebas que consideró oportunas para su defensa.
6. **Admisión de pruebas.** El 5 de octubre de 2022, la autoridad instructora tuvo por presentado el escrito de contestación del denunciado, asimismo, por admitidas las pruebas documentales ofertadas, las cuales tuvo por desahogadas por así permitirle su propia y especial naturaleza. Dicha determinación fue notificada al recurrente el 14 de octubre de 2022.
7. **Requerimiento.** Mediante auto de 2 de febrero de 2023, la autoridad instructora requirió a la Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la DEOE remitiera cualquier evidencia que se relacionara con las inasistencias en los días 19, 20 y 22 de mayo de 2022 atribuidas al recurrente. El 8 de febrero siguiente la Subdirectora de Circunscripción Plurinominal desahogó el requerimiento.
8. **Ampliación de la demanda.** El 29 de marzo de 2023, derivado del análisis de las pruebas remitidas por la Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la DEOE, la autoridad instructora determinó ampliar la materia del procedimiento, por la probable vulneración a lo previsto en el artículo 72 fracción VI del Estatuto, consistente en acumular más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, sin causa justificada o sin autorización expresa de superior jerárquico. En consecuencia, se ordenó emplazar nuevamente al recurrente; notificando dicho auto el 3 de abril de 2023.
9. **Contestación al emplazamiento.** El 14 de abril de 2023, el recurrente dio contestación al emplazamiento y aportó los medios de prueba que consideró idóneos.
10. **Admisión de pruebas.** El 18 de abril de 2023, la autoridad instructora admitió las pruebas de descargo ofrecidas por el recurrente las cuales tuvo por desahogadas por su propia y especial naturaleza, haciéndolo de su conocimiento el 20 de abril siguiente.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

11. **Alegatos.** El 9 de mayo de 2023, la autoridad instructora otorgó al actor un término de 5 días para formular sus alegatos; notificándolo el 16 de mayo de 2023. En consecuencia, el 23 de mayo de 2023 el recurrente presentó escrito mediante el cual formuló alegatos y ofreció como prueba superveniente una nota médica de fecha 22 de febrero de 2023.
12. **Cierre de instrucción.** Mediante auto de 18 de julio de 2023, se admitió la prueba ofertada por el actor como superveniente; por lo que, al no existir actuaciones, diligencias o pruebas por desahogar, se determinó el cierre de instrucción.
13. **Resolución.** El 19 de septiembre de 2023, la autoridad resolutora dictó la resolución correspondiente en el PLS, la cual determinó
 - a) Declarar la nulidad de las actuaciones relacionadas con la imputación de la conducta consistente en tener más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, sin causa justificada o sin autorización expresa de superior jerárquico, toda vez que se actualizó la figura de caducidad, al exceder el término de 6 meses para emitir el auto de ampliación de demanda, posterior a la data en que se tuvo conocimiento formal de dichas inasistencias.
 - b) Tener por acreditadas las conductas infractoras consistentes en: omitir desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados; omitir asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos; así como, ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación o autorización de su superior jerárquico inmediato, imponiendo una sanción consistente en la suspensión de 5 días naturales sin goce de sueldo, determinación que fue notificada personalmente al recurrente el 4 de octubre siguiente.

II. RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/RI/SPEN/58/2023.

1. **Interposición.** El 18 de octubre de 2023, el recurrente presentó recurso de inconformidad.
2. **Auto de turno.** El 20 de octubre de 2023, el Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica del INE acordó formar el expediente y registrarlo bajo la clave **INE/RI/SPEN/58/2023**, así como turnarlo a la Unidad Técnica de Fiscalización como el órgano encargado de elaborar el proyecto de auto de

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

admisión, de desechamiento o, en su caso, el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, respecto del recurso de mérito a efecto de someterlo a consideración de la JGE.

3. **Remisión del expediente INE/RI/SPEN/58/2023.** El 23 de octubre de 2023, mediante el oficio INE/DJ/16090/2023, la Dirección de Asuntos Laborales, de la Dirección Jurídica, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el expediente INE/RI/SPEN/58/2023, asimismo; el 24 de octubre de 2023, la Dirección de Asuntos HASL, de la Dirección Jurídica, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización las constancias que integran el expediente del PLS identificado con la clave alfanumérica INE/DJ/HASL/PLS/26/2022, con motivo del medio de impugnación presentado por el recurrente.
4. **Admisión y cierre de instrucción.** Mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, la Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, determinó la admisión del presente recurso, por estimar que satisfizo los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 358, 359, 360 y 365 del Estatuto vigente, razón por la cual, se ordenó decretar el cierre de instrucción y formular el proyecto de resolución correspondiente para que el mismo se sometiera a la consideración del Pleno de esta JGE para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia.

Esta Junta General Ejecutiva es **competente** para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 48, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 40, párrafo 1, inciso o) del Reglamento Interior del INE; 360, fracción I del Estatuto vigente; 49 y 52, párrafo 1 de los Lineamientos; por tratarse de un recurso de inconformidad mediante el cual se reclama una resolución emitida por el Secretario Ejecutivo del INE, que puso fin al PLS **INE/DJ/HASL/PLS/26/2022**.

SEGUNDO. Procedencia

El presente recurso de inconformidad cumple con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 361 y 365 del *Estatuto*, en los términos siguientes:

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

- a) Forma.** El recurso se presentó por escrito ante la Oficialía de Partes Común del *INE*, dirigido al Encargado de despacho de la Dirección Jurídica del *INE*; señalando el nombre completo del recurrente; la resolución impugnada y su fecha de notificación; así como los agravios en contra de la resolución y su firma autógrafa.
- b) Legitimación e interés jurídico.** El recurso fue interpuesto por la persona sancionada en la resolución de la Secretaría Ejecutiva del *INE* de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, que resolvió el procedimiento laboral sancionador **INE/DJ/HASL/PLS/26/2022**, en el que aduce una afectación y su pretensión es que se revoque la resolución impugnada.

Oportunidad. El recurso fue presentado en tiempo, toda vez que la resolución impugnada le fue notificada al recurrente el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, y el recurso fue presentado el dieciocho de octubre siguiente, por lo que es incuestionable que el escrito fue presentado dentro del plazo de diez días hábiles establecido en la normativa. Expuesto lo anterior, y al haber quedado satisfechos los requisitos referidos, se procede al estudio de los conceptos de agravio vertidos por el recurrente.

TERCERO. Estudio de Fondo

I. Consideraciones de la Junta General Ejecutiva

Marco normativo

En el artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que las relaciones de trabajo entre el *INE* y sus servidores se regirán por la ley electoral y el Estatuto que, con base en ella, apruebe el Consejo General.

El artículo 204, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, prevé que en el Estatuto se establecerán, además de las normas para la organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, las relativas a los empleos administrativos y de trabajadores auxiliares del *INE* y de los Organismos Públicos Locales. Asimismo, se dispone que en el mismo Estatuto se fijarán las normas y procedimientos para la determinación de sanciones, así como los medios ordinarios de defensa.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

Por su parte, en el *Estatuto* se establecen las siguientes disposiciones que resultan relevantes para el presente caso:

- Que dicho ordenamiento tiene como objeto, entre otros, regular el procedimiento laboral disciplinario (artículo 1, fracción IV); que son obligaciones del personal del INE, desempeñar sus funciones con apego a los criterios de eficacia, eficiencia; (artículo 71, fracción IV); así como desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos; (artículo 71, fracción XI).
- Que se entiende por PLS, la serie de actos desarrollados por las autoridades competentes dirigidos a determinar posibles conductas y, en su caso, la imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se incumpla las obligaciones y prohibiciones a su cargo o infrinja las normas previstas en la Constitución, la Ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del INE, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones aplicables (artículo 307).
- Que la responsabilidad laboral se extingue con la renuncia o fallecimiento de la persona denunciada, el cumplimiento de la sanción, o la prescripción de la falta o de la sanción (artículo 309)
- Que si durante la sustanciación del procedimiento laboral sancionador la persona denunciada se separa en forma definitiva del INE o termina su encargo, se emitirá resolución en la que se declarará extinguido el procedimiento, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que le puedan ser exigidas, para lo cual la autoridad instructora lo hará del conocimiento del Órgano Interno de Control del INE a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo correspondiente, y se ordenará el archivo del expediente (artículo 309).
- Que las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los tres años y las **leves al año**. El plazo de prescripción es continuo y comenzará a contarse desde que se haya cometido la conducta probablemente infractora o a partir del momento en que ésta hubiera cesado o cuando se tenga conocimiento (artículo 309).

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

- Que la prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento, a cuyo efecto la determinación correspondiente deberá ser notificada a las partes. La ejecución de las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde que se transgreda el cumplimiento de la sanción si éste hubiere comenzado. (artículo 309).
- Que el procedimiento laboral sancionador podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. Se inicia de oficio cuando cualquiera de las áreas u órganos del INE, hacen del conocimiento de la autoridad instructora las conductas probablemente infractoras (artículo 319).
- Que la autoridad instructora al conocer de la comisión de una posible conducta infractora, iniciará una investigación preliminar, con el objeto de conocer las circunstancias concretas del asunto y recabar elementos que permitan determinar si ha lugar o no al inicio del procedimiento laboral sancionador (artículo 320).
- Que el **auto de admisión** es la primera actuación con la que da inicio formal el Procedimiento Laboral Sancionador, **interrumpiendo el plazo para la prescripción** (artículo 323).
- El recurso de inconformidad es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutoria y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas, (artículo 358).
- El recurso de inconformidad podrá ser interpuesto por quien tenga interés jurídico para promoverlo (artículo 359).
- Serán competentes para resolver el recurso de inconformidad: la Junta, tratándose de las resoluciones emitidas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que pongan fin al procedimiento laboral sancionador (artículo 360).

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

Por su parte, en los Lineamientos se establece, en lo que importa al caso, lo siguiente:

- Los lineamientos tienen por objeto regular las disposiciones previstas en el Libro Cuarto del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, relativas a la conciliación de conflictos laborales, el procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad (artículo 1).
- **Prescripción:** Es la extinción de la facultad de las autoridades competentes del INE para iniciar, determinar la responsabilidad y ejecutar las sanciones en el procedimiento sancionador, al fenecer el plazo previsto en el artículo 309 del Estatuto (artículo 3, fracción XV).
- **El recurso de inconformidad:** Es el medio de defensa que puede interponer el personal del INE, para controvertir los acuerdos emitidos por la autoridad instructora y las resoluciones emitidas por la resolutora, que tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas.
- Las etapas que integran el recurso de inconformidad son las siguientes:
 - a) Presentación del recurso y en su caso turno;
 - b) Acuerdo de admisión, desechamiento o no interposición;
 - c) En su caso, admisión y desahogo de pruebas;
 - d) Resolución. (artículo 15, fracción 4)

Finalmente, en la LFT, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional -aplicable supletoriamente, con fundamento en el artículo 289, fracción II, del Estatuto- se dispone que para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción; sino cumplido el primer día hábil siguiente (artículo 117 de la LFT).

II. Resolución impugnada

Como se ha mencionado, en el presente caso se objeta la resolución recaída al procedimiento laboral sancionador identificado con la clave INE/DJ/HASL/PLS/26/2022 de diecinueve de septiembre del año en curso, dictada por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, en la que se determinó:

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

SEGUNDO. *Han quedado acreditadas las conductas infractoras atribuidas al probable infractor previstas en los artículos 71, fracciones XI y XIII y 72, fracción XIII, del Estatuto, consistentes en omitir desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados; y asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos; así como, ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación o autorización de su superior jerárquico inmediato, por lo que se le impone la sanción de **suspensión de 5 días naturales sin goce de sueldo.***

III. Agravios

PRIMERO. Le causa agravio la resolución de la autoridad resolutora en la que se le sancionó con una suspensión de 5 días sin goce de sueldo, lo anterior debido a que la autoridad instructora no fundó ni motivó de manera suficiente las conductas atribuidas al recurrente al no tomar en cuenta los factores fácticos que rodearon las conductas infractoras, pues estas derivaron de suposiciones y no estaban debidamente acreditadas y valoradas las pruebas de descargo.

Lo anterior, toda vez que se le atribuye la responsabilidad por no concluir el registro del censo de funcionarios públicos el viernes 4 de febrero de 2022 realizado hasta el domingo 6 del mismo mes y año, señalando que en autos se advierte que si se realizó dicho registro.

Asimismo, señala que la autoridad instructora omitió tomar en consideración el contexto factico, en el sentido de que la Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Seguimiento comenzaba su encargo y no estaba al tanto de las actividades e información que se llevaban en dicha Dirección, entre ellas que algunos funcionarios “no contaban con la aplicación VPN”;

Por lo que respecta a la conducta atribuida de 3 y 4 de mayo de 2022 señala que dio cumplimiento a las indicaciones, sin embargo que se omite tener en consideración que en las reuniones de Gestión por Procesos se emite una minuta con los datos pormenorizados de dichas reuniones, máxime que nunca recibió instrucción expresa de hacer su seguimiento aunado a que esa función corresponde a la Subdirección de Seguimiento de la Dirección de Planeación y Seguimiento, por tanto, no se encuentra establecida en las funciones del Catálogo de Cargos y Puesto dicha función a su puesto, hecho que no advirtieron las autoridades instructora y resolutora.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

Por otra parte, señala que las conductas atribuidas en relación con los hechos del 31 de enero y 4 de mayo de 2022, no se pueden considerar dolosas o de mala fe, ya que con dichas conductas en ningún momento se afectó al INE, debido a que está acreditado en autos que se dio cumplimiento a las indicaciones, siendo que la autoridad instructora y resolutora no consideraron el contexto factico toda vez que si la Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Seguimiento hubiera mantenido un criterio de interpretación o análisis de las circunstancias, estos hechos nunca habrían sido denunciados.

Finalmente, respecto de las conductas relacionadas con no asistir a sus labores puntualmente los días 11 de febrero, 25 de abril y 19 de mayo y respetar los horarios establecidos, así como ausentarse de su lugar de trabajo o abandonar sus actividades la autoridad instructora realizó su análisis basado en declaraciones de testigos *“no idóneos”*, ya que guardan una relación de subordinación con las personas que ocupan cargos de mando en la Dirección de Planeación y Seguimiento, lo cual se puede interpretar que *“por miedo o temor a alguna represalia tengan que manifestarse conforme a indicaciones expresas por sus superiores jerárquicos.”*

SEGUNDO. Le causa agravio la resolución impugnada debido a que considera que la autoridad instructora realizó una indebida calificación a las conductas infractoras al calificarlas como faltas graves, ya que, de acreditarse, estas no se realizaron con dolo o mala fe; aunado a que se omitió señalar claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos constitutivos de las denuncias.

Asimismo, considera que la sanción debe reclasificarse como leve, por la ausencia de dolo, mala fe o premeditación, lo cual tendría como consecuencia jurídica, la declaración de nulidad del procedimiento por caducidad de la acción, precisando que al reclasificarse como una falta leve, la facultad de la autoridad Instructora y resolutora habría fenecido, lo anterior en virtud de que la notificación del inicio del procedimiento deviene del auto del 5 de septiembre de 2022, mismo que le fue notificado el 18 de septiembre de 2022, por lo que conforme al artículo 310 del Estatuto, la facultad para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar las faltas caducará en tres años, contados a partir del inicio del procedimiento, en el caso de faltas graves y muy graves, y un año en el caso de faltas leves. Bajo este supuesto, el plazo para que la autoridad pudiera sancionarlo feneció el 18 de septiembre de 2023, aunado a que la resolución que se recurre surtió efectos el 4 de octubre de la anualidad, lo que se traduciría en la caducidad de la facultad sancionadora por parte de la autoridad.

IV. Estudio de los agravios

Una vez que se han sintetizado los motivos de disenso que la parte recurrente hace valer, se da contestación de éstos de manera conjunta, sin que ello le cause lesión alguna, conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: **“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”**, por lo que serán analizados conforme las siguientes consideraciones:

Respecto de los agravios antes señalados se consideran **infundados** en razón de lo siguiente:

En primer lugar, es conveniente precisar que la observancia del *principio de exhaustividad* deriva del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, en el que se consagra el derecho a la satisfacción de las condiciones fundamentales que deben regir en el procedimiento jurisdiccional, que concluye con el dictado de una resolución en que se dirimen las cuestiones efectivamente debatidas.

Este derecho fundamental obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda y todas las pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que, cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún punto litigioso, tal actuación es violatoria del principio de exhaustividad.

En ese sentido, el principio de exhaustividad se cumple cuando se agota cuidadosamente en la sentencia el estudio de todos y cada uno de los planteamientos de las partes y que constituyan la causa de pedir, porque con ello se asegura la certeza jurídica que debe privar en cualquier respuesta dada por una autoridad a los gobernados en aras del principio de seguridad jurídica. Por tanto, el principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia todos y cada uno de los argumentos sustanciales de las partes durante la integración de la controversia.

Esto es, toda autoridad tanto administrativa como jurisdiccional está obligada a estudiar la totalidad de los puntos que conforman las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, porque el proceder exhaustivo asegura la certeza jurídica que deben generar las resoluciones emitidas.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que el principio de exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y la determinación de la totalidad de las cuestiones de los asuntos en los que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas¹.

Por su parte, el *principio de congruencia* se refiere a que todo proceso se constituye como un método racional de debate y como un instrumento para la solución de los conflictos de intereses que se suscitan en la convivencia; no obstante, para que tal finalidad se alcance, debe haber una exacta correspondencia entre la pretensión del actor, la oposición del demandado, los elementos de prueba válidamente incorporados y la decisión del Tribunal.

Esta concordancia recibe el nombre de congruencia, la cual supone la identidad entre lo resuelto por el juez y lo controvertido oportunamente por las partes; este principio exige que la sentencia deba estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en la demanda y contestación respectivas. En efecto, por congruencia ha de entenderse aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente, por los litigantes y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico.

A saber, implica que debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación, formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, conforme a la Jurisprudencia 28/2019 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

“CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijan las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y

¹ Jurisprudencia 12/2001 de rubro EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17; Jurisprudencia 43/2002 de rubro PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 6, Año 2003, página 51.; así como, la tesis XXVI/99 de rubro EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES. Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 3, Año 2000, páginas 45 a 47.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutive. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho¹².

En ese orden de ideas, de las constancias que obran en el expediente en el que fue debidamente emplazado el recurrente y derivado de la investigación correspondiente, se desprende, que se realizaron todas y cada una de las etapas y actos que se prevén para la sustanciación de los PLS, en el que el hoy actor, en uso de su garantía de audiencia, efectuó una serie de manifestaciones reiteradas negando la realización de las conductas investigadas.

Así, durante la sustanciación del procedimiento la autoridad instructora recabó, admitió y analizó de forma íntegra las pruebas de cargo y de descargo desglosadas en el apartado 5 de la resolución recurrida³, mismas que fueron valoradas conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos del artículo 289, fracción V, del Estatuto.

En específico, por lo que respecta a la conducta consistente en la omisión de desempeñar con diligencia, cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciba de sus superiores, la autoridad resolutora valoró los correos electrónicos enviados al recurrente en los cuales se le pedía atender diversas actividades así como las declaraciones de diversos testigos relacionados con los hechos, pruebas que la autoridad consideró suficientes para acreditar que la falta se acreditó toda vez que informó la actualización en el censo de funcionarios públicos posterior a la fecha en que le fue requerido y omitió remitir los reportes de las sesiones efectuadas el 3 y 4 de mayo 2022.

Por lo que respecta a la conductas consistentes en omitir asistir puntualmente a sus labores respetar los horario establecidos y ausentarse de su lugar de trabajo o abandonar su lugar de trabajo o abandonar sus actividades sin justificación o

² Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24.

³ Señaladas a fojas 17 a 23 de la resolución recurrida.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

autorización de su superior inmediato, la autoridad resolutora consideró diversas actas de hechos en las cuales se hizo constar la inasistencia y/o retiro del recurrente de su lugar de trabajo en horario laboral; correos electrónicos, así como la declaración de diversos testigos respecto de cuyas pruebas determinó que el recurrente no se presentó en los horarios que fueron fijados respecto a los días 19 y 22 de mayo de 2022 para realizar actividades relacionadas con los simulacros del SIJE y conteo rápido; y no justificó durante el primer día laboral la causa, pues tuvo que ser requerido por su superior jerárquica el motivo por el que no pudo recurrir.

Finalmente, en relación con la omisión de asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos los días 11 de febrero, 25 de abril y 3, 9 y 22 de mayo todos de 2022, así como ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación o autorización de su superior jerárquica inmediata los días 16 de marzo y 4 de mayo de 2022, la autoridad resolutora consideró las actas de hechos en donde se advierte la inasistencia del recurrente, así como se da cuenta que no se reincorporó a sus actividades, hechos que fueron coincidentes con la declaración de los testigos.

En ese tenor, la autoridad instructora realizó un análisis sistemático y completo del caudal probatorio para en su caso acreditar o desvirtuar las faltas atribuidas al actor, analizando las particularidades de cada una. Ello es así, toda vez que para realizar un estudio de acreditación y responsabilidad de las conductas imputadas, la autoridad instructora verificó las pruebas documentales, técnicas y testimoniales referenciadas al amparo de los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos del artículo 289, fracción V, del Estatuto; atribuyéndole únicamente el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 71, fracción XI del Estatuto, al *omitir desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones de sus superiores jerárquicos, derivado de que informó su actualización en el censo de funcionarios públicos posterior a la fecha en que le fue requerido y omitió remitir los reportes de las sesiones efectuadas el 3 y 4 de mayo de 2022* y una vulneración a lo previsto en los artículos 71 fracción XIII y 72, fracción XIII, del Estatuto, al *omitir asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos los días 11 de febrero, 25 de abril y 3, 19 y 22 de mayo, todos de 2022; así como al ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación o autorización de su superior jerárquica inmediata los días 16 de marzo y 4 de mayo, ambos de 2022*; además de absolverlo por la vulneración a lo previsto en el artículo 72, fracción VII, del Estatuto, al no obrar medios de prueba en autos con la entidad suficiente para acreditar que el recurrente se presentó al Instituto en estado de ebriedad o que ingirió bebidas dentro de éste.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

En ese sentido, se resalta que la determinación que ahora se combate fue debidamente fundada y motivada conforme a los criterios de exhaustividad, congruencia y legalidad, considerando las circunstancias que rodearon las conductas atribuidas al actor, objetando el hecho de que la autoridad instructora y resolutora hubiera basado su determinación en suposiciones como lo afirma el recurrente.

Ahora bien, por lo que respecta a que realizó en tiempo la actividad de concluir *el registro del censo de funcionarios públicos*, es el mismo actor quien afirma que dicha tarea fue concluida hasta el día 6 de febrero de 2022, argumentando que el retraso se debió a que *“algunos funcionarios no contaban con la aplicación VPN”* en su equipo de cómputo, situación que desconocía la Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Seguimiento, ya que dicha funcionaria comenzaba su encargo y no estaba al tanto de las actividades e información que se llevaban en dicha Dirección.

Del análisis del expediente se advierte correo del 31 de enero de 2022, que da cuenta de la solicitud de la subdirectora al recurrente de atender el registro correspondiente al *Censo de Funcionarios Públicos* y solicita al personal bajo su coordinación realizar lo conducente antes del 4 de febrero de 2022; consecuentemente, el recurrente hizo del conocimiento a su superior jerárquico la conclusión del *Censo* el día 6 de febrero de 2022, sin embargo, se tiene el diverso de 8 de febrero de 2022, en el que su superior jerárquico le agradece el cumplimiento de la actividad, enfatizando que dicha tarea debió atenderla y notificarla a más tardar el 4 de febrero anterior, conforme a las indicaciones recibidas de la Coordinación Administrativa.

Por lo anterior se advierte que, si bien el probable infractor atendió la actividad encomendada, esta se efectuó fuera del plazo que se otorgó para tal efecto, ello es así toda vez que su superior jerárquico instruyó que a más tardar el 4 de febrero se debía concluir del registro del Censo de funcionarios públicos, no obstante, el recurrente lo concluyó hasta el 6 de febrero siguiente.

Conviene precisar que la aplicación VPN (Red Privada Virtual) es una herramienta informática a la que se puede acceder a través del portal de Intranet de este INE, que tiene como propósito que el personal en general pueda ingresar de manera segura desde el exterior a los sistemas del INE que no cuentan con salida a Internet, para hacer uso del servicio es necesario contar con los permisos correspondientes, los cuales se deben solicitar por el jefe inmediato (Jefe de Departamento, Subdirector o Director de área), a través de la *Consola de Petición de Servicios*

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

CAU; en la especie, la autoridad valoró el hecho de que el recurrente omitió adjuntar medios de prueba que acreditaran que, de manera diligente, había realizado acciones para solventar dicha situación y que por tanto el retraso de la actividad no era una situación adjudicable a éste, por lo que la afirmación de que la Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Seguimiento desconocía o no estaba al tanto de dicha situación y/o de las actividades e información que se llevaban en la Dirección a su cargo, se deducen como argumentos que pretenden atenuar el grado de responsabilidad del trabajador.

Por otro lado, respecto de las conductas acontecidas el 3 y 4 de mayo de 2022 contrario a lo señalado por el recurrente en el sentido de que nunca recibió instrucción expresa de dar seguimiento a diversas reuniones de “Gestión por Procesos” llevadas por la Dirección Ejecutiva de Administración, por parte de la Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Seguimiento, aunado a que dicha función le correspondía a la Subdirección de Seguimiento de la Dirección de Planeación y Seguimiento, además de no encontrarse establecida en las funciones del *Catálogo de Cargos y Puesto* dicha función a su puesto, situación que no fue advertida por las autoridades instructora y resolutora, resulta **infundada**.

Lo anterior, en virtud de que en la resolución impugnada se advierte que el recurrente omitió remitir el reporte de las sesiones efectuadas el 3 y 4 de mayo de 2022, reconociendo en su escrito de contestación que por una omisión no se guardaron los archivos por lo que no se enviaron, con independencia de que señala si dio el seguimiento de las citadas reuniones; hecho que se sustenta con el contenido del correo de 4 de mayo de 2022, a través del cual se le exhortó para el debido desempeño de sus responsabilidades y atender el seguimiento de reuniones virtuales relacionadas con los manuales de procesos, pues si bien el recurrente afirmó encontrarse en línea, este no se encontraba atento a su desarrollo y denotó una falta de diligencia para el envío de la información solicitada.

Aunado a lo anterior es menester señalar que en la descripción de las funciones del Catálogo de Cargos y Puestos atribuidas al cargo que desempeña, se establece en el punto identificado como Función 15 que, de acuerdo al Objetivo del cargo, “*la persona que ocupe el puesto **deberá desempeñar las funciones que le confieran las disposiciones aplicables o su superior jerárquico***”; es decir, aún cuando dentro de las funciones descritas en el Catálogo no se exprese de manera literal el seguimiento de las reuniones en la gestión de procesos, resalta que la realización de las actividades encomendadas por el superior jerárquico obedecen a las acciones que este debe emprender a fin de cumplir los objetivos y metas

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

institucionales conferidas a la Dirección de Planeación y Seguimiento, situación que fue considerada en la resolución recurrida.

Por otro lado, en relación con lo manifestado por el recurrente, respecto a que las conductas atribuidas en relación con los hechos del 31 de enero y 4 de mayo de 2022, no se pueden considerar dolosas o de mala fe, ya que con dichas conductas en ningún momento se afectó al INE, debido a que está acreditado en autos que se dio cumplimiento a las indicaciones, se desprende de la resolución que contrario a lo denunciado, fueron considerados los factores fácticos y las circunstancias de los hechos, ya que a fin de calificar las conductas con mayor objetividad, la autoridad resolutora consideró en conjunto: el tipo de infracción; las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos realizados (contexto fáctico y medios de ejecución) y la magnitud de la afectación al bien jurídico tutelado o del peligro a que hubiera sido expuesto.

De igual forma, en cuanto a la intencionalidad con la que fueron realizadas las conductas, se tomó en cuenta que dentro del caudal probatorio no se advirtió de manera indiciaria que las mismas hubieran sido realizadas de manera premeditada o dolosa, denotando que en gran medida las faltas atendieron a la falta de condiciones durante el trabajo a distancia para el registro del censo como la VPN, el descuido en el guardado de archivos, así como a cuestiones personales y de salud del probable infractor; aunado a que se resaltó que durante su trayectoria no se le había instruido previamente procedimiento laboral alguno al recurrente, motivo por el cual existía ausencia de reincidencia por su parte. Así entonces, considerando el contexto factico en el cual se materializaron las conductas, se advirtió que existía una afectación grave al bien jurídico tutelado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 356 del Estatuto.

Lo anterior es así porque, tal y como se razonó en la resolución del PLS, de las pruebas que integraron el expediente se acreditaron tres de las cuatro conductas investigadas ; esto es: se atribuyó por una parte el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 71, fracción XI del Estatuto, al *omitir desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones de sus superiores jerárquicos, derivado de que informó su actualización en el censo de funcionarios públicos posterior a la fecha en que le fue requerido y omitió remitir los reportes de las sesiones efectuadas el 3 y 4 de mayo de 2022* y una vulneración a lo previsto en los artículos 71 fracción XIII y 72, fracción XIII, del Estatuto, al *omitir asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos los días 11 de febrero, 25 de abril y 3, 19 y 22 de mayo, todos de 2022; así como al ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación o autorización de su superior jerárquica*

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

inmediata los días 16 de marzo y 4 de mayo, ambos de 2022; además se le absolvió por la vulneración a lo previsto en el artículo 72, fracción VII, del Estatuto, al no obrar medios de prueba en autos con la entidad suficiente para acreditar que el recurrente se presentó al Instituto en estado de ebriedad o que ingirió bebidas dentro de éste

En síntesis, se arribó a la conclusión de que el infractor vulneró la normativa estatutaria, al retrasar las actividades que sus superiores jerárquicos le solicitaban, así como no dar cumplimiento a las mismas; lo cual provocó, a su vez, el retraso de las actividades al poner en riesgo los objetivos institucionales de la DEOE, ya que no desempeñó sus labores con diligencia, cuidado y esmero apropiados; dejó de asistir puntualmente a sus labores, así como dejó de respetar los horarios establecidos al ausentarse de su lugar de trabajo o abandonar sus actividades sin justificación o autorización de su superior jerárquico inmediato; lo anterior, atendiendo a la afectación relevante al bien jurídico tutelado, en virtud de que existió una vulneración al principio de legalidad al no desempeñar las actividades encomendadas con cuidado, esmero, atendiendo las instrucciones de sus superiores jerárquicos (obligación prevista en la norma estatutaria), actuando en contra de los fines del instituto y poniendo en riesgo las actividades que se realizan en su lugar de adscripción.

Finalmente, por lo que respecta al argumento manifestado por el recurrente relativo a que la autoridad instructora consideró declaraciones de testigos no idóneos para tal efecto, tomando en cuenta que guardan una relación de subordinación y que *“por miedo o temor a alguna represalia tengan que manifestarse conforme a indicaciones expresas por sus superiores jerárquicos”*, se considera que el actor parte de una premisa errónea, ya que pretende desestimar dicha probanza solo por el hecho de que los testigos guardan una relación de subordinación con las personas que ocupan cargos de mando en la Dirección de Planeación y Seguimiento, lo que, desde su perspectiva, resultaría insuficiente para acreditar las conductas imputadas; lo anterior, podría resultar contrario a la naturaleza de dicha prueba, pues resulta inverosímil suponer que, para que la prueba testimonial ofrecida por el denunciante sea idónea esta deba emanar de un lugar distinto en el que se suscitaron los hechos o bien, de un área de trabajo distinta a la de adscripción del recurrente, máxime que no aporta alguna evidencia que sustente su dicho.

Al efecto resulta aplicable jurisprudencia número 2a./J. 12/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, página 422, que señala:

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

TESTIGOS, TACHA DE LOS, SU PROCEDENCIA, NO EXIME A LA JUNTA DE ANALIZAR EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES. *La procedencia de la tacha, por referirse a circunstancias de índole personal que concurren en los testigos, si bien trae aparejada una presunción de parcialidad, esto no significa que, por ese hecho, lo por ellos manifestado, carezca de todo valor jurídico, de manera tal, que se torne innecesario analizar el contenido de sus atestos; sino que, por el contrario, lo anterior genera, la obligación en el juzgador, de apreciar con mayor cuidado y detenimiento el dicho de los declarantes, a fin de determinar, si efectivamente, faltaron a la verdad, alteraron o falsearon los hechos, sobre los que vertieron declaración, pero no tiene la consecuencia, de eximir a la Junta, de prescindir de su estudio. Por similitud, también es aplicable la tesis número XVI.1o.4 L, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicado por en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 720, que al rubro y texto indican: **TESTIGOS, TACHA DE LOS, SU PROCEDENCIA, NO EXIME A LA JUNTA DE ANALIZAR EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES.** La procedencia de la tacha, por referirse a circunstancias de índole personal que concurren en los testigos, si bien trae aparejada una presunción de parcialidad, esto no significa que, por ese hecho, lo por ellos manifestado, carezca de todo valor jurídico, de manera tal, que se torne innecesario analizar el contenido de sus atestos; sino que, por el contrario, lo anterior genera, la obligación en el juzgador, de apreciar con mayor cuidado y detenimiento el dicho de los declarantes, a fin de determinar, si efectivamente, faltaron a la verdad, alteraron o falsearon los hechos, sobre los que vertieron declaración, pero no tiene la consecuencia, de eximir a la Junta, de prescindir de su estudio.*

En ese sentido, puede advertirse que el actor se limita a señalar afirmaciones generales e imprecisas sin sustento o fundamento alguno y no se precisan argumentos tendientes a demostrar su dicho o la ilegalidad de la resolución controvertida.

Sirve de apoyo orientador a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. *El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo*

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse”

No pasa inadvertido que el recurrente tiene la carga de la prueba sobre los agravios que expresa en el presente recurso de inconformidad, a efecto de evidenciar la ilegalidad de los actos, asimismo, debe expresar de forma clara aquellas consideraciones de la resolución que estime ilegales, para permitir que se lleve a cabo su estudio y determinar si la actuación de la autoridad se realizó en apego a derecho o no. Por lo tanto, al no desprenderse del agravio una identificación clara de las consideraciones específicas de la resolución que estima infundada, no resulta viable realizar un análisis distinto al planteado por el recurrente.

Asimismo no pasa desapercibido para esta JGE que a efecto de emitir una determinación objetiva y con apego a la legalidad, la autoridad instructora recabó, admitió y valoró las pruebas obtenidas durante la investigación conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria en términos del artículo 289, fracción V, del Estatuto. En ese sentido, se le otorgó a las pruebas testimoniales en un primer momento, valor probatorio de indicio, pues al tratarse de oficios y declaraciones que si bien fueron elaborados y rendidos por funcionarios electorales, lo cierto es que no se efectuaron en ejercicio de sus atribuciones, si no como testigos de los hechos materia del presente procedimiento, los cuales para otorgarles valor probatorio pleno, tuvieron que ser administrados con medios de prueba que las corroboran, análisis que fue expuesto en el apartado denominado *Estudio de fondo* de la resolución.

De tal suerte que, contrario a lo que manifiesta el recurrente, la autoridad resolutora al emitir la resolución que hoy se impugna, concatenó todas y cada una de las pruebas técnicas y documentales aportadas, así como los elementos y probanzas recabadas durante la investigación, mismos que permitieron esclarecer los hechos que fueron atribuidos, y derivado de esa actividad permitiera la emisión de una resolución fundada y motivada en la que se concluyó sancionar al denunciado.

En ese sentido, es de explorado derecho que el propósito fundamental de los medios de prueba consiste en allegar al juzgador de los elementos necesarios para

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

que conozca, con la mayor precisión posible, la verdad acerca de los hechos generadores de la controversia que ha sido sometida a su potestad; en consecuencia, y como se desprende del expediente que nos ocupa, esta JGE considera que existen pruebas suficientes que permitieron a la autoridad resolutora acreditar las conductas infractoras previstas en los artículos 71, fracciones XI y XIII y 72, fracción XIII, del Estatuto, consistentes en omitir desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados; y asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos; así como, ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación o autorización de su superior jerárquico inmediato.

Por otro lado, el recurrente señala que existió una indebida calificación de la conducta, al determinarla grave, sin que la autoridad tomara en cuenta la ausencia de dolo o mala fe en su actuar, aunado a que se omitió señalar de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la resolución; argumento que se considera infundado conforme a lo siguiente:

En primer lugar, una vez acreditadas tres de las conductas denunciadas, la autoridad sancionadora debió realizar el análisis de cada uno de los elementos conforme lo previsto en el artículo 355 del Estatuto, a fin de determinar la sanción a imponer. Así, en la resolución se estableció que a fin de calificar las conductas con mayor objetividad, se considerarían: el tipo de infracción; las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos realizados (contexto fáctico y medios de ejecución); y la magnitud de la afectación al bien jurídico tutelado o del peligro a que hubiera sido expuesto; los cuales fueron desarrollados en el apartado 9. *Determinación de la sanción* de la resolución en cita.

En dicho apartado se expuso, que las infracciones por parte del probable infractor derivaron de omisiones y acciones, consistentes en: omitir desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones de sus superiores jerárquicos; omitir asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos; y ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación o autorización de su superior jerárquica inmediata. A su vez, se detallaron de manera sucinta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, considerando el contexto fáctico y sus medios de ejecución (ausencia de dolo y mala fe); siendo importante aclarar que la norma estatutaria no exige que la exposición de dichos puntos deba hacerse de manera amplia, pues de manera sistemática, el estudio pormenorizado de ello fue objeto de análisis en el Considerando 8. *“Estudio de Fondo”*.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

Dicho lo anterior, el artículo 355 del Estatuto establece que las sanciones se impondrán entre los grados de mínimo, medio y máximo, derivado del estudio de los elementos constitutivos y de ejecución; y en los casos previstos en las fracciones I a XXVIII del artículo 72 del Estatuto, aún y cuando la conducta pueda ser calificada de leve a grave y la sanción a imponerse sea de amonestación a suspensión, ésta podrá incrementarse, dependiendo las particularidades de cada caso, debiendo atender lo dispuesto en los artículos 354 y 355 de ese ordenamiento, en los casos previstos en los numerales XXIX a XXX, la conducta será calificada de grave a muy grave, y la sanción a imponerse irá desde suspensión sin goce de sueldo hasta la destitución de la persona infractora; lo anterior, conforme lo establecido en el artículo 356 del Estatuto.

En ese tenor, resulta congruente que, tomando en consideración el contexto fáctico en el cual se materializó la conducta infractora, se advirtiera una afectación **grave** al bien jurídico tutelado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 356 del Estatuto; toda vez que se acreditaron tres de las conductas investigadas, concluyendo, como se expuso en párrafos anteriores, que el infractor vulneró la normativa estatutaria, al retrasar las actividades que sus superiores jerárquicos le solicitaban, así como no dar cumplimiento a las mismas; lo cual provocó, a su vez, el retraso de las actividades al poner en riesgo los objetivos institucionales de la DEOE, ya que no desempeñó sus labores con diligencia, cuidado y esmero apropiados; dejó de asistir puntualmente a sus labores, así como dejó de respetar los horarios establecidos al ausentarse de su lugar de trabajo o abandonar sus actividades sin justificación o autorización de su superior jerárquico inmediato; lo anterior, atendiendo a la afectación relevante al bien jurídico tutelado, en virtud de que existió una vulneración al principio de legalidad al no desempeñar las actividades encomendadas con cuidado, esmero, atendiendo las instrucciones de sus superiores jerárquicos (obligación prevista en la norma estatutaria), actuando en contra de los fines del instituto y poniendo en riesgo las actividades que se realizan en su lugar de adscripción.

Por las razones anteriores, se advirtió una afectación relevante al bien jurídico tutelado, en virtud de que existió una vulneración al principio de legalidad, incumpliendo las obligaciones previstas en la norma estatutaria, actuando en contra de los fines del INE y poniendo en riesgo las actividades que se realizan en su lugar de adscripción.

De ahí que, tomando en cuenta la naturaleza de la conducta, la valoración en conjunto del caudal probatorio, la intencionalidad con la que fueron ejecutadas, siendo que en el caso se advirtió la inexistencia de premeditación o dolo, la

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

valoración del nivel jerárquico del actor en virtud de las facultades a su cargo establecidas en el Catálogo y de las que emanar de las instrucciones de sus superiores jerárquicos, así como el grado de afectación al bien jurídico protegido y la responsabilidad directa en la comisión de la conducta atribuida, resulta proporcional y congruente la sanción impuesta consistente a cinco días naturales de suspensión sin goce de sueldo.

Por lo anteriormente razonado, esta JGE determina no ha lugar a la pretensión del recurrente en el sentido de atenuar la calificación de la falta de grave a leve y, por ende, decretar la caducidad de la facultad sancionadora.

En consecuencia, al resultar **INFUNDADOS** los agravios esgrimidos por el recurrente, conforme a los razonamientos vertidos en la presente resolución, lo procedente es **CONFIRMAR** la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la autoridad resolutoria en el expediente **INE/DJ/HASL/PLS/26/2022**, por la que se decretó la **suspensión de 5 días naturales sin goce de sueldo**.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 358; 360, fracción I; y 368 del Estatuto vigente, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la medida disciplinaria de **suspensión de 5 días naturales sin goce de sueldo** emitida en el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/26/2022.

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda al recurrente la presente resolución a través de la Dirección Jurídica.

TERCERO. Se instruye a la DEA y a la DESPEN agregar una copia de la presente Resolución al expediente personal que se tiene a nombre del recurrente y se realicen las acciones a las que haya lugar.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/58/2023**

CUARTO. En su oportunidad **ARCHÍVESE** este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 29 de enero de 2024, por votación unánime del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Licenciado Alejandro Sosa Durán, de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestra Guadalupe Yessica Alarcón Góngora; del encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciado Roberto Carlos Félix López; de la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Licenciada María Elena Cornejo Esparza; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Doctora Amaranta Arroyo Ortiz; de los encargados de los Despachos de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestro Isaac David Ramírez Bernal y de lo Contencioso Electoral, Licenciado Hugo Patlán Matehuala y; de la encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva y Secretaria de la Junta General Ejecutiva, Maestra Claudia Edith Suárez Ojeda y de la Consejera Presidenta y Presidenta de la Junta General Ejecutiva, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Licenciado Giancarlo Giordano Garibay.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LA ENCARGADA DEL DESPACHO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI
ZAVALA**

**MTRA. CLAUDIA EDITH SUÁREZ
OJEDA**